

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

TRIBUNAL EN PLENO.

Sesión del jueves 8 de junio de 1989.

PRESIDENTE: Sr. Ministro Licenciado
Carlos del Río Rodríguez.

ASISTENCIA: Sres. Ministros Licenciados.
Carlos de Silva Nava.
Ignacio Magaña Cárdenas.
Salvador Rocha Díaz.
Samuel Alba Leyva.
Mariano Azuela Güitrón.
Noé Castañón León.
Felipe López Contreras.
Luis Fernández Doblado.
Francisco Pavón Vasconcelos.
Victoria Adato G. de Ibarra.
Santiago Rodríguez Roldán.
José Martínez Delgado.
Jorge Carpizo.
Atanasio González Martínez.
José Manuel Villagordoa L.
Fausta Moreno Flores de C.
Sergio Hugo Chapital G.
Juan Díaz Romero.
Ulises Schmill Ordóñez.
Carlos del Río Rodríguez.

AUSENTE: Sr. Ministro Licenciado.
Angel Suárez Torres.

SALA AUXILIAR: Sres. Ministros Licenciados
Irma Cué Sarquis.
Clementina Gil de Lester.
Carlos García Vázquez.

Principió la sesión a las 12:30 hrs.

M. PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señores ministros, de conformidad con el --
cambio de impresiones habida en la sesión privada, some-
to a la consideración de ustedes la conveniencia de cam-
biar la orden del día, de manera que se vea en primer --
término el amparo en revisión número 3085/88, en segundo
término el amparo en revisión número 1532/88 que estaba-
listado en el lugar diez del ministro Villagordoa Loza--
no, en tercer lugar el amparo en revisión 6006/87, de la
ponencia del ministro Ulises Schmill Ordóñez, en cuarto-
lugar la consulta respecto al trámite que debe seguirse-

- 2 -

a la controversia constitucional Número 2/89, de la ponencia del ministro Salvador Rocha Díaz, en quinto lugar, el amparo en revisión número 2133/88, quejoso Acesco Instalaciones, S. A., del ministro ponente Samuel Alba Leyva, y después, en sexto lugar, se verá el amparo en revisión 8/89, de la ponencia del señor ministro Mariano - - Azuela Güitrón y se continuará con el orden que ya estaba fijado en la lista normal.

¿Están conformes señores ministros?

Tome nota señor secretario; y dé cuenta entonces en primer término con el amparo en revisión número 3085/88.

C. SECRETARIO: Amparo en revisión 3085/88, - promovido por Grupo Matco, S. A. de C. V., contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, concretamente en cuanto a sus artículos cuarto y décimo, y del Reglamento Interior del propio Departamento del Distrito Federal. - La ponencia es de la señora ministra Fausta Moreno Flores, en el proyecto se propone: se modifique la sentencia recurrida, se sobresea en el juicio de garantías en relación con los actos que se indican y se niegue el amparo a la quejosa en contra de los actos y autoridades que se indican.

M. PRESIDENTE: Está a discusión el proyecto, tiene la palabra la señora ministra Fausta Moreno Flores.

M. MORENO FLORES: Gracias señor presidente, - ya anteriormente se había identificado este negocio y - había pedido su aplazamiento el señor ministro Juan Díaz Romero, también había yo expresado que había correcciones mecanográficas en las fojas 1, 8, 9, 11, 20, 30, 31, 35 y 36 y unas nuevas que me hizo favor de darme el señor ministro Ulises Schmill Ordóñez, que van en la foja - 39, con esas correcciones, someto a la consideración del Pleno este proyecto.

M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro Díaz Romero.

2

- 3 -

M. DIAZ ROMERO: Gracias señor presidente, --
me voy a permitir hacer una respetuosa observación en --
relación con este proyecto, aunque va posiblemente a mo--
dificar los resolutivos, en realidad no es de mucha im--
portancia, empieza la observación en la hoja 21, en el --
considerando tercero, donde se entra a examinar oficio--
samente una causal de improcedencia con base en la frac--
ción V, respecto del artículo 10 de la Ley Orgánica del--
Departamento del Distrito Federal por considerar que es--
te precepto no es aplicado en la especie, se empieza a --
examinar el problema y en relación con el Jefe de la Uni--
dad Departamental de Atención, Liquidación y Servicios --
al Contribuyente se transcribe en la página 22 el oficio
que constituye el primer acto de aplicación en perjuicio
del quejoso, después de que se transcribe en la hoja 23--
y hasta la 24, dice el proyecto: "Como puede verse del --
contenido del oficio que ha quedado transcrito, no se --
desprende que en él se hubiere aplicado el artículo 102--
de la Ley Orgánica", y con base en esa omisión que con--
sidera así, se sobresee con base en el artículo 73, --
fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, --
efectivamente no es invocado expresamente el artículo 10
de la Ley Orgánica reclamada, pero a mí no me queda duda
de que pese no haberse invocado expresamente el artículo
10, sí se estaba aplicando implícitamente, porque la --
autoridad responsable aplicadora, el Jefe de la Unidad --
Departamental de Atención, Liquidación y Servicios al --
Contribuyente, se apoya en el Reglamento Interior, que --
es el que le da existencia jurídica y, a su vez, el Re--
glamento Interior se apoya obviamente, no solamente en --
el artículo 42, sino también en el artículo 102 de la --
Ley Orgánica, por eso yo observo que no debemos sobre--
seer con ningún fundamento, obviamente tenemos la frac--

- 4 -

ción V del 73, porque si hay actos de aplicación, eso -- originará que el artículo 10 se tenga que examinar conjuntamente con el artículo 4º de la ley reclamada, y darle exactamente el mismo tratamiento para que en los resolutivos en lugar de decir que se modifica la sentencia recurrida, se sobresee respecto del artículo 10 y luego la Justicia de la Unión ampara y protege respecto del -- artículo 4º, se revoque la sentencia, me parece que se -- tendría que revocar, se suprima el sobreseimiento y entre la negativa del amparo no solamente por el artículo 4º, sino también por el artículo 10.

M. PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra Fausta Moreno Flores.

M. MORENO FLORES: Muchas gracias señor presidente, agradezco muchísimo la observación que me hace el señor ministro Juan Díaz Romero y la acepto en su integridad, de tal forma que se suprimiría en la foja 21 el considerando tercero en su integridad que va de la 21, - 22, 23 y 24 hasta donde se citan las tesis que dice: promovido con motivo de su aplicación, el considerando que sigue sería tercero en lugar de cuarto y en la parte final en los puntos resolutivos, el primero efectivamente sería: se revoca la sentencia recurrida. El segundo se -- suprime en su totalidad, el tercero sería segundo y en -- el último párrafo de esa hoja 47, se dijera en cuanto -- hace a sus artículos 4º y 10 del Reglamento Interior y -- así seguiría el proyecto, muchas gracias.

M. PRESIDENTE: Señora ministra para no errar, si usted ^{le} me lo permite, no podríamos exponer el tercero -- que pase a ser segundo, es decir: la Justicia de la -- Unión no ampara ni protege a Grupo Matco, S. A. de C.V., en contra de las autoridades y por los actos precisados-

- 5 -

en el resultando primero de esta ejecutoria y ya, porque así concluiríamos todos para que no haya duda, porque -- hay algunas autoridades que creo que así lo dicen.

M. MORENO FLORES: Con todo gusto acepto su -- observación.

M. PRESIDENTE: Con la modificación que ha -- aceptado la señora ministra del señor ministro Díaz Ro-- mero, continúa a discusión el proyecto.

Si ningún ministro se pronuncia en contra, -- ¿están conformes con la modificación?, ¿están conformes -- con el proyecto señores ministros?.

En votación económica se consulta si se -- -- aprueba.

A P R O B A D O .

En consecuencia se declara: PRIMERO.- Se re-- voca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de -- la Unión no ampara ni protege a Grupo Matco, Sociedad -- Anónima de Capital Variable, en contra de las autorida-- des y por los actos precisados en el resultando primero -- de esta ejecutoria. Notifíquese.

Dé cuenta señor secretario.

C. SECRETARIO: Amparo en revisión 1532/88, -- promovido por Alfredo Urtusuastegui Barraza y coagraviada, contra actos del Congreso de la Unión y de otras -- autoridades, consistentes en la expedición y aplicación -- de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, -- reformada mediante el decreto publicado en el Diario Ofi-- cial de la Federación del 27 de agosto de 1932, y de la -- Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédi-- to, concretamente en cuanto a sus artículos 341 y 53, res-- pectivamente. La ponencia es del señor ministro Villagor-- do Lozano, en ella se propone que modifique la sentencia recurrida, se sobresea en el juicio de garantías en re-- lación con los actos que se indican con la salvedad a que se refiere el resolutivo anterior, se niegue el amparo -- a los quejosos en contra de los actos de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero del pro-- yecto.

M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor mi-- nistro ponente.

- 6 -

M. VILLAGORDOA LOZANO: Muchas gracias señor-presidente, señores ministros, quisiera manifestar que se han tomado en cuenta en este proyecto, correcciones de tipo mecanográfico que me han sido señaladas muy apreciablemente por el señor presidente en las páginas 3, 7, 8, 9, 19, 21, 30, 32, 34, 35 y 37, también quisiera agregar en la página 39, segundo párrafo, la votación de los dos amparos en revisión que se citan, si ustedes desean, para efectos de recordatorio, el amparo en revisión 229/88, fallado el diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve por mayoría de diez votos, de los señores ministros: Alva Leyva, Castañón León, Fernández Delgado, Pavón Vasconcelos, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores y el presidente del Río Rodríguez, en contra del voto de los señores ministros de Silva Nava, Rocha Díaz, Azuela-Guitrón, López Contreras, Adato Green, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero

CONTINUA EN EL SEGUNDO TURNO.

...Pavón Vasconcelos, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Fausta Moreno Flores y Presidente Del Río Rodríguez, en contra de los votos de los señores ministros: De Silva Nava, Rocha Díaz, Azuela Guitrón, López Contreras, Adato Green, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y en este asunto fue ponente el señor ministro Chapital Gutiérrez y también con anterioridad en el amparo en revisión No. 821/88 Cerámica Ladritac, S. A. de C. V., en sesión de 23 de agosto de 1988, por mayoría también de 10 votos de los señores ministros Cuevas Mantecón, Alva Leyva, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagorda Lozano, Moreno Flores y Presidente Del Río Rodríguez, en contra de los votos de los señores ministros López Contreras, Azuela Guitrón, Díaz Infante, Adato Green, Martínez Delgado, Suárez Torres y Díaz Romero, Schmill Ordóñez y siendo en este asunto ponente el ministro González Martínez.

Y también quiero agradecer al señor ministro Don Ulises Schmill Ordóñez, unas observaciones que me hizo muy atinadamente, en lo que se refiere a la parte relativa al sobreesimiento que se propone y particularmente en las fojas 28, se harían algunas correcciones. En el primer párrafo, que partiendo más o menos del comienzo de la página, que dice: "a juicio de los agraviados, adolecen los preceptos reclamados, debe concluirse que no se encuentran obligados a expresar motivos de inconformidad relacionados directamente con tales -

7

actos en especial, dado que son éstos..." aquí se suprime "en su conjunto" "...los que le otorgan vigencia a la ley reclamada, permitiendo así que sean aplicados a los casos-concretos comprendidos en las hipótesis normativas".

El siguiente párrafo también tiene correcciones, en esos términos y dice: "En consecuencia, debe entenderse que en la especie los actos reclamados comprenden las etapas del proceso legislativo y los actos de aplicación de los preceptos impugnados"; y, al final del párrafo se suprime "en su conjunto" y se elimina el siguiente párrafo y la tesis que se invoca y consecuentemente también se suprimiría dentro de la propuesta y tesis de este proyecto, la que está marcada con el número uno, esa sería una de las correcciones que se mencionan y en los demás términos, lo someto a la consideración de los señores ministros.

CONTINUA SEGUNDO TURNO

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

EL M. AZUELA: En relación con el fondo del asunto, ya según lo especificó el señor ministro ponente, he votado en contra y no reabriré la discusión. Quería - yo hacer un planteamiento que podría tomarse como sugerencia, en el considerando cuarto, como se recordará, en el - se sobreesa en el juicio en relación a los actos que se - reclaman del Congreso de la Unión, consistentes en la discusión, aprobación, etc., del artículo 341.

Pienso que podría modificarse un poco la redacción para que quedara claro que se está sobreesiendo en el juicio respecto del Congreso de la Unión, porque en relación al artículo 341 de la Ley General de Faltas y Operaciones de Crédito, tan no se decreta el sobreesimiento que todo el estudio del problema es en relación a la constitucionalidad de este precepto, se entiende que lo - que se está queriendo decir es que se sobreesa en cuanto a que se le atribuyeron al Congreso de la Unión, cuando - en realidad se trata de un precepto que fue elaborado por el Presidente de la República, en uso del ejercicio de facultades extraordinarias; pero sí estimo que podría darse alguna incongruencia en el proyecto, por lo que me permito hacer esta proposición.

EL M. VILLAGORDOA: Gracias señor Presidente, pues estoy conforme con la propuesta que me hace el - señor ministro Azuela y le agradezco, haremos la aclaración correspondiente.

EL M. ROCHA DIAZ: Gracias señor Presidente, me apena nohear la prudencia del señor ministro Azuela - Gaitrón y reabrir la discusión sobre el fondo de la cuestión y esto lo hago en homenaje al señor ministro Carpiso

que no participó en la discusión anterior y además con el propósito de conquistar su voto a favor de la propuesta minoritaria que hemos venido sosteniendo. Me permití, y no voy a repetir en este momento, entregar al señor ministro Cerpizo el texto del voto particular que formulamos en el amparo en revisión de Tapia Hermanos, pero creo que en este caso debe analizarse y aparece con mayor obvia la inconstitucionalidad del precepto, si se analiza en congruencia con el artículo 53 de la Ley Reglamentaria de los Servicios de Banca y Crédito; haciendo un brevísimos resamen sostuve en la discusión de Tapia Hermanos, diciendo en el voto particular, que ni del contrato de prenda, ni del derecho real de prenda, surge el derecho del acreedor prendario a que el bien pignorado sea sustituido por dinero a través de un procedimiento que solamente puede ser determinado exhibiendo el importe del crédito garantizado, es este procedimiento para sustituir, entre comillas, el bien pignorado por dinero, en donde claramente se violan las garantías del artículo 14 constitucional, puesto que no se le da una posibilidad real de defensa al deudor pignorado, sino simplemente se le permite evitar el remate de sus bienes por medio de la exhibición del importe de la deuda. Este aparente derecho de sustitución del bien pignorado por dinero no aparece en ningún precepto de la ley, no aparece de la ley que regula la prenda, ni en la materia mercantil, ni en la materia civil, no aparece consignado por la doctrina. Textos legales y doctrina reconocen que el contrato de prenda tiene por objeto constituir el derecho real de prenda y que el derecho real de prenda consiste en la afectación que el bien pignorado sufre en cuanto a la preferencia en el pago por parte del -

acreedor pignoraticio, con el producto de la venta del bien y eso nadie lo discute, pero se invoca en los proyectos que hemos discutido y en éste se insiste, que el acreedor pignoraticio tiene derecho a la sustitución del bien pignorado, por dinero que es el producto del remate; es violatorio de las garantías individuales que contiene el artículo 341, y se dice en el proyecto de Tapia Hermanos, y aquí ya no se insiste nada porque no se puede afirmar categóricamente que en nada se afecta el derecho del acreedor pignoraticio, porque el dinero quedará ahí a las resacas de los litigios -- que se establezcan para determinarse si el deudor pignoraticio debía o no debía. Pero aquí resulta que los recurrentes invocan el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y de la combinación de ambos preceptos resalta manifiesta y obvia la inconstitucionalidad -- puesto que el artículo 53, dice: "Artículo 53.º La prenda -- sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevenida en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bas -- tando al efecto, que se consignen en el documento de crédito -- respectivo con expresión de los datos necesarios para identi -- ficar los bienes dados en garantía". -- "En todo caso de an -- ticipo sobre títulos o valores, de prenda sobre ellos, sobre sus frutos y mercancías, en los casos que proceda, de confor -- midad con la mencionada ley por medio de corredor o de dos -- comerciantes de la localidad..." O sea, siguiendo el proce -- dimiento de inconstitucionalidad del 341 de la Ley de Títu -- los, pero agrega: "...conservando en su poder la parte del -- precio que cubra las responsabilidades del deudor, que po -- drán aplicar en compensación de su crédito y guardando a dis -- posición de aquél el sobrante que pueda existir".

Yo lo que veo cómo del análisis conjunto de esos preceptos no se llegue a la conclusión de que a un sujeto se le está privando de sus bienes, sin haber sido oído ni vencido en juicio, se le remata su bien y la única posibilidad es que se le da y exhibe lo que vende, pero se le remata y la institución nacional de crédito toma el dinero y se cobra y le guarda su cambio por el algún día le demanda; y tendrá derecho en el juicio donde se litigue sobre la legitimidad del crédito, simplemente porque no hay una sentencia que condene a restituirle lo que ya le quitaron. Pero obviamente, mientras tanto, todos los intereses, todos los productos de ese dinero, pues obviamente le corresponden a la sociedad nacional de crédito.

Yo no veo cómo puede haber alguna argumentación que sostenga que no se están violando las garantías establecidas por el artículo 14 constitucional. Creo que si existen razones, y creo que las ^{que} existen para considerar aisladamente al 341 como inconstitucional, resultan manifestas y obvias si se analizan en concordancia con el artículo 53, que es lo que nos está planteando en esta especie; esta especie es distinta a la de Tapia Hermanos, que ya se discutió y votó; y esa es la razón por la cual he querido hacer uso de la palabra para insistir y hacer notar a los señores ministros que en este caso tenemos una diferencia substancial respecto del anterior, en el cual aparece claramente violada la garantía del artículo 14.

EL M. VILLACORDA: Gracias señor Presidente, señores ministros, yo si quisiera volver a insistir en los conceptos que se vierten en este proyecto y en el que también se sostuvieron en los proyectos anteriores; yo si quise-

ro referirnos a lo que en un principio comentaba en su participación el señor ministro Rocha Díaz, al referirnos a los conceptos del derecho real de prenda y del contrato de prenda. Respecto del derecho real de prenda, yo si quisiera recordar que en tanto en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en Materia Mercantil, como en el Código Civil que tiene carácter federal está definido lo que es el contrato de prenda, pero en lo que es el derecho real de prenda y el contrato de prenda, en el derecho real de prenda debemos de considerar que en el momento que se constituye la situación del deudor prendario con relación al bien que es de su propiedad cambia su status jurídico; radicalmente en este momento hay un desposeimiento de los bienes dados en prenda al deudor pignoraticio; y además surge en favor del acreedor un derecho preferente para pagarse con el bien dado en prenda, casi en el momento en que no se ha pagado el crédito garantizado. Consecuentemente, siendo un contrato de garantía está vinculado definitivamente a este derecho real, con la garantía.

Pero vayamos a los actos de excepción que prevé la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en beneficio del mismo deudor prendario, dice la Ley: "que podrán los bienes dados en prenda, tratándose de créditos de adjudicación o bien, como es en la especie, el que los bienes dados en prenda pueden quedar en depósito del deudor prendario, es un depositario prendario, porque dice que: se la considerará como un depositario judicial de los bienes dados en prenda." Entonces, en esas condiciones, yo si quisiera insistir en que también si analizamos el artículo 341, y analizamos también el artículo 334, que es en donde se establecen los diferentes casos de prenda, pero que --

esas características subsisten y así lo vemos en cada una -- de las fracciones al momento de constituirse el derecho real de prenda, esos bienes prácticamente están ya dentro del patrimonio del deudor, pero minimizados, ya no les queda más -- que el derecho de poder recuperar la prenda en el momento en que haga el pago del crédito y esto está perfectamente claro; tanto en la Ley de Títulos como en la nueva Ley.

Ahora bien, en el procedimiento que hay para -- que judicialmente se haga la venta de la prenda, ya desde -- las veces anteriores lo hemos sostenido, que necesariamente el acreedor prendario tiene que acreditar al juez a quien lo está solicitando la prenda, a quien vaya a hacer, quien vaya a correr traslado al deudor, para que a los tres días siguientes exija el pago; existe el contrato de prenda, existe el -- crédito vencido y que no fue pagado. En esas condiciones, en realidad ya el procedimiento de la venta en la Ley Federal, -- viene a señalar la forma en que se va a realizar.

Ahora bien, se nos menciona también el artículo 53, pero no olvidemos que en el segundo párrafo del 53 que usted nos hizo favor de leer, se menciona que en todos los casos las sociedades nacionales de crédito se sujetarán al procedimiento establecido en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; en este caso se habla de que se podrá compensar el crédito precisamente con el importe de lo vendido, eso en beneficio de quién es?, del mismo deudor, porque hay un momento de temor de que se haga esa aplicación y compensación de que ya no seguirán corriendo los intereses a cargo de él, por la falta de pago puntual y es en el caso fundamental.

Ahora bien, volviendo a retomar el concepto -- del contrato de prenda, ya lo habíamos comentado también las-

veces anteriores con relación a los casos de prenda. En los casos de prenda qué ocurre?, el deudor prestatario va y entrega, así como dice la ley, los bienes que son la base en la materia de la garantía.....

CONTINUA TERCER TURNO

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO TERCERO.
Hernández A.-González Ch.

...si el acreedor no lo cubre, su crédito que es la única hipótesis es entonces cuando procede el acreedor pignoraticio a la venta, para que del precio que se obtenga de la venta de ^{esas} bienes se haga la aplicación de sus pagos y queden los remanentes en favor del deudor prendario; les vuelvo a recordar que - habíamos comentado por ejemplo el caso del Monte de Piedad, si no paga uno el crédito prendario que tiene, salen a remate los bienes y los remanentes que operaⁿ a favor del deudor prendario contra la boleta de los bienes que fueron dados en prenda y no fue refrendado y que por lo tanto, se ventila que no fue pagado el crédito, tiene derecho a obtener legalmente a lo que llamamos las demasías del Monte de Piedad, para recuperar la parte del precio que no haya sido aplicado al crédito; en esas condiciones, yo sí estimo que el artículo 341 y 53 de la Ley ^{TÍTULO 5 OPERACIONES} de ~~Servicios Públicos~~ de Crédito son constitucionales y no violan las garantías individuales como se han mencionado porque - precisamente la situación del contrato de crédito del deudor - prendario está formalmente especificado y perfectamente precisado en la ley que establece y que da las bases de que se constituya la prenda. A mayor abundamiento, en el proyecto como ustedes sabrán apreciar, no obstante que no es costumbre, en el cual yo estoy de acuerdo, se invoque algún autor mexicano, más que nada porque la vez pasada se indicó que los autores mexicanos y extranjeros no decían nada sobre la prenda; en el caso - concreto, de la prenda mercantil quise invocar que aparecen en el proyecto los antecedentes relativos a la obra de César Vivante en su tratado sobre derecho mercantil.

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO TERCERO.
Hernández A.-González Ch.

EL M. CARPIZO: Voy a tratar de ser sumamente breve por que sé que ustedes han discutido ampliamente esta situación, yo ví el debate del último caso, y al haber visto que la votación había quedado tan cerrada, yo he estado pensando cómo debo de dar mi voto y he encontrado en uno de los platillos de la balanza que el proyecto en cuestión está de acuerdo con los precedentes del Tribunal en Pleno, siento que el proyecto está -- muy bien hecho y que como se concibe a la prenda pues es mayormente como se ha concebido desde la época de los romanos; además, estoy muy sensible que si la mayoría de este Pleno pone -- que el artículo 341 de la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito, es anticonstitucional, yo creo que en la realidad -- mexicana van a haber efectos económicos negativos y especialmente para las gentes de menores recursos, pero en el otro platillo de la balanza he estado tratando de ver al artículo 341, con las garantías que se encuentran en el artículo 14 constitucional, y la verdad, he de decir que me convencieron las opiniones de Rojina Villegas, de Abascal y el voto particular de los señores Ministros Rocha y Azuela; por lo tanto, como he llegado al convencimiento de que sí es anticonstitucional voy a votar en contra del proyecto.

EL M. ROCHA DIAZ: Yo estoy absolutamente de acuerdo, con todo lo que nos ha expresado el señor Ministro Villagordoa, con una salvedad, que hay que respetar las garantías individuales del artículo 14 constitucional, nadie niega que derivado -- del contrato de compraventa, el vendedor tiene la obligación -- de entregar la cosa, propongo manu militari, el propio comprador puede quitársela, yo creo que no, tiene que respetarse la

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO TERCERO.
Hernández A.-González Ch.

garantía del 14 constitucional, nadie discute que el comprador debe pagar el precio, pero en modo alguno se estima que - va a poder por su propia autoridad ir a ejercer violencia para lograr la satisfacción de su derecho, va a tener que acudir ante los tribunales establecidos en una secuencia lógica de las normas y sería excesivo que yo distrajera a los señores ministros con una elucubración jurídica, solamente hasta que exista el hecho ilícito de que no pague, va a entrar la autoridad judicial a determinar si efectivamente pagué o no pagué y después de eso se va a proceder a la ejecución de la sentencia correspondiente. ^D dice el señor Ministro Villagor-
doa que la compensación que prevé el artículo 53, opera en - beneficio del deudor, si el que debe y si ya no debe, obviamente no opera en su beneficio, está asumiéndose que en todo caso el deudor ^{presunción} ~~significativo~~ es un deudor moroso e injustificado, de dónde podemos tomar esa presunción, por el contrario, nuestro artículo 14 constitucional, nos dice: "no debe ser privado de sus posesiones y derechos sino mediante juicio", donde efectivamente se respetan las formalidades esenciales del procedimiento que afecten mis defensas, no exclusivamente exhibir lo que el acreedor dice que le debo, inclusive, como decíamos en la anterior discusión si hubo un recibo de pago de todas maneras vende la cosa, si hay pago de compensación venden la cosa, se declara nulo tal contrato de prenda y en consecuencia falta de validez del derecho real de prenda, venden la cosa, quiere decir que mis defensas están minimizadas como bien dice el recurrente en este recurso, pues no hay un respeto a la garantía de audiencia, hay una simulación para hacer

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO TERCERO.
Hernández A.-González Ch.

como que se me respeta la garantía de audiencia, que ^{se} exhibir el importe de lo que debe y no ^{para} la venta y además en combinación con el artículo 53, y además no tiene compensación, y a ver tú después que haces, yo creo que la violación es manifiesta, que todos los derechos sustantivos requieren para su plena eficacia pues de la intervención de la autoridad judicial, la cual debe respetar ley y autoridad y las garantías establecidas por nuestra Constitución y podríamos referirnos a todos y cada uno de los contratos, todos general ^{de} obligaciones, si la obligación no es cumplida, tendrá que acudirse ante la autoridad ^{judicial} ~~jurisdiccional~~ llevarse a cabo un procedimiento donde se respeten las garantías del 14, y después evitar la resolución que en su caso sea ejecutable, insisto, nadie duda del derecho del acreedor pignoraticio a ser pagado, preferentemente con el producto de la venta de los bienes pignorados, cómo después que se ^{le} va vencido en juicio o sea, después de que se le hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento y haya una posibilidad plena no exclusivamente ^{la} exhibición del monto de lo adeudado.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ: Es impactante lo que dice el señor Ministro Rocha, refiriéndose a que se le está vendiendo fuera de juicio, lo que menciona el proyecto y lo que sostiene el señor Ministro Villagordoa en el mismo, y las expresiones que él dio, es de que no hay la violación a la garantía de audiencia porque son contratos distintos hay una sustitución en todo caso de un contrato de prenda y dice él - que por la fuerza me están quitando la prenda, no, no por la fuerza, hubo la voluntad del deudor de dar una garantía pren-

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO TERCERO.
Hernández A.- González Ch.

daría y se obligó a un contrato distinto de crédito a pagar en el momento que fuera oportuno el adeudo o el crédito que se le hubiera otorgado, entonces ese crédito que se le otorgó, se garantizó con la prenda, al haber una posibilidad por ejemplo de pérdida de la prenda o que desaparezca la prenda o de no pago, inclusive lo único que se manifiesta por la ley es que habiendo habido la voluntad de desposeerse al deudor prendario de -- ese bien, está él ajustándose a lo que dice la ley respecto de la prenda misma, pero por el otro lado si tiene la garantía de audiencia para combatir si el contrato de crédito fue nulo y -- si ya pagó etcétera, no hay ningún daño que se le esté haciendo en sus derechos al deudor prendario porque hubo la voluntad de dar esa prenda, ajustándose a los lineamientos de la ley, y la ley le da, le otorga las garantías en diferentes procedimientos, que la misma ley señala.] Yo siento que es de acuerdo además, es muy importante que si nosotros decimos es inconstitucional este artículo, pues realmente el aspecto económico va a sufrir mucho, por qué, porque hay un sistema que viene como dijo el Ministro Carpizo que si desde los romanos y que se ha ido depurando a través del tiempo, en nuestra legislación se adoptó, -- se ha manejado con él, no hay para mí la violación de la garantía de audiencia y yo considero que es muy importante el que -- si en estos momentos el Pleno de esta Suprema Corte dice que -- es inconstitucional, los artículos referentes a la prenda, habrá serios problemas para el desarrollo económico y del país.

EL M. AZUELA: Muy significativo el primer aspecto, -- nunca he visto ni en los proyectos ni en las tesis que se han -- redactado, una respuesta a un argumento que dio el Ministro López Contreras cuando intervino en este asunto, el señor Minis-

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO TERCERO.
Hernández A.-González Ch.

tro López Contreras dijo, bueno pero hay en este precepto una estipulación, una regla que dice que en caso de notoria urgencia y bajo la responsabilidad del acreedor, el Juez podrá autorizar la venta, aun antes de hacer la notificación al deudor, eso en este proyecto nunca lo he oído responder, cómo es posible que aun ante esta disposición que expresa categóricamente dice sin tener que ver al deudor, se podrá bajo la responsabilidad del acreedor autorizar la venta, nunca se ha dicho, porque esto no viola la garantía de audiencia; lo segundo que yo señalaría, es que si en la época de los romanos hubiera habido juicio de amparo y un artículo 14 constitucional, pues probablemente habrían tenido las mismas dificultades que ahora está habiendo, para sacar adelante una postura en el sentido de que es constitucional este precepto.

EL M. SCHMILL: Yo no voy a referirme al fondo del asunto, voy a referirme a la parte del sobreseimiento, las modificaciones que introdujo el Ministro Villagordoa, creo que no son suficientes, si se ve la página 13 del proyecto, se verá que en el considerando tercero, el Juez de Distrito sobreseyó con los actos del proceso legislativo seguido por el Congreso de la Unión y en colaboración con el Presidente de la República respecto del artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sobreseyó aduciendo que en relación con dichos actos no se expresaron conceptos de violación, por tanto el Juez de Distrito parte del supuesto de que se siguió el proceso legislativo para emitir el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en un considerando que lleva el número cuatro en la ponencia que está en la página 29 decía, se sobresee sobre los actos del supuesto proceso legislativo para señalar suficientemente que dicho proceso

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

turno TERCERO.
Hernández A.- González Ch.

no existió, toda vez que fue omitido por el Presidente de la República, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en uso de facultades ulteriores, pero sin embargo, en el considerando tercero, se hace un análisis de que en el sentido de que las consideraciones del Juez de Distrito no están en lo correcto y que consecuentemente procede revocar el sobreseimiento decretado en ese punto resolutivo, yo creo entonces que en realidad el considerando tercero donde se hacen estas consideraciones debe simplemente suprimirse y sobreseerse por los argumentos contenidos en el considerando cuarto; no hay necesidad de ponerse a hacer un análisis que en mi opinión no está correctamente hecho sobre si hubo o no concepto de violación con el proceso legislativo, por ciento inexistente en el caso y si existe una unidad entre el proceso legislativo y los actos de aplicación o si puede analizarse el proceso legislativo desde el punto de vista del concepto de violación...

(sigue turno cuarto)

TRIBUNAL PLENO
JUNIO 8/1989

CUARTO TURNO.
TEJEDA - ESPINAL

...y si existen una unidad entre el proceso legislativo y los actos de aplicación o si puede analizarse el proceso legislativo desde el punto de vista de los conceptos de violación aducidos en contra de las normas creadas por su proceso legislativo, yo creo que quizás se simplificaría si simplemente se suprimiera el considerando tercero y si quedara el considerando cuarto-correspondiente sobreseyendo sobre ese inexistente procedimiento legislativo.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor ministro Villagordoa.

EL M. VILLAGORDOA LOZANO.- Muchas gracias señor presidente. Señores ministros quisiera primero por cuestión de orden de mi proyecto, referirme a la observación muy atinada del señor ministro Schmill, no le encuentro inconveniente en que se suprima el considerando tercero y en el cuarto, le vamos a quitar el precepto que consiste de la, este, del sobreseimiento, - con relación al Congreso de la Unión. Con relación a lo que manifestaba el señor ministro Rocha Díaz, yo sí quisiera ser un poquito insistente en lo que ya expresé, quizás no tenga yo la cualidad de ser elocuente o convincente en lo que yo expreso, - pero estimo y vuelvo a insistir, que en el contrato de prenda - hay características muy especiales; el contrato de prenda vuelvo a insistir y el señor ministro lo dijo con mucha claridad, - el señor ministro Atanasio González Martínez, de que, de acuerdo con el mismo contrato, en una forma voluntaria, el deudor -- prendario hace la entrega jurídica de los bienes que se dan en prenda, entonces ya no hay posesión de los mismos, hay un despojo, pero veíamos que en el caso concreto del crédito habilitación y avío, la ley le da la ventaja a un deudor pignorativo o cumplido de que pueda conservar los bienes, pero como un depositario judicial, un depositario judicial que es una situación jurídica muy precaria. En consecuencia, en el momento en que haya incumplimiento en el procedimiento del 341, yo vuelvo-

TRIBUNAL PLENO
JUNIO 8/1989

CUARTO TURNO.
TEJEDA - ESPINAL

a reiterar sí se respeta la garantía de audiencia y perdón por la insistencia y por qué razón, porque al recibir el juez los documentos que acreditan primero la existencia del crédito - - pignoratitia, segundo la existencia de la prenda, tercero, los bienes están en poder del deudor prendario y que haya incumplimiento en el pago, con esos elementos aportados por el acreedor prendario, ya tiene tres días el deudor para que en su caso hacer la oposición de la venta en lo que dice aquí de la -- venta presentando el precio o el importe del crédito para que ya en esta forma no se conceda su venta, ya luego vienen las -- otras características de solucionar. En esas consideraciones, -- al haber ya ese desposeimiento, al haber también ya el ejercicio del hecho de preferencia en la venta de los bienes para -- que el acreedor pueda cubrir el adeudo del deudor prendario, -- creo que con eso satisface plenamente la garantía de audiencia del deudor. Con relación a lo que señalaba el señor ministro -- Azuela, en relación con el mismo comentario que hubo en ^{la} vez anterior y que señaló el ministro López Contreras, no se hace -- mención en el caso porque los bienes dados en prenda no son de las características que puedan requerir que por su propia naturaleza requieran de una venta inmediata, porque en el artículo por ejemplo 338 habla de que el acreedor prendario, además de estar obligado a la guarda y conservación de los bienes o títulos dado en prenda, debe ejercitar todos los derechos inherentes siendo los gastos por cuenta del deudor y debiendo aplicarse en su oportunidad al pago del crédito todas las sumas que -- sean percibidas salvo pacto en contrario, es nulo todo convenio que limite la responsabilidad que para el acreedor establece este artículo.- Si consideramos por un lado, las obligaciones del acreedor prendario y si los bienes dados en prenda y -- por su propia naturaleza son bienes fungibles y si dentro de -- la fungibilidad de estos bienes se encuentra también la naturaleza perecedera de estos bienes, muchas veces si no se recurre

TRIBUNAL PLENO
JUNIO 8/1989

CUARTO TURNO
TEJEDA - ESPINAL

a una venta inmediata de esos bienes, es precisamente en beneficio del mismo deudor prendario que de hecho estipula la garantía, entonces qué es lo que se hace, se puede solicitar esa venta inmediata sin necesidad del traslado para evitar que perezca en perjuicio no nada más del acreedor o distributivo de esos bienes, es por esa razón que se establece; ahora en el proyecto no ayuda esta situación porque no está señalada esa situación, porque como se menciona en la parte relativa de los resultandos, los bienes que se dieron en prenda son fundamentalmente maquinaria y equipo y además otros que son propios de la naturaleza de un préstamo de aplicación obvia que no se encuentran en la situación de que hubiera habido necesidad de que el acreedor prendario hubiera pedido al juez la venta inmediata de los bienes sin la participación del deudor prendario, precisamente para poder recuperar o salvar lo que queda en concepto de garantía. En esas circunstancias yo sí estimo que en este caso, por eso no se aludió a esto, porque desviaríamos un poquito la litis en esta situación. Por esta razón no se mencionó.

EL M. PRESIDENTE.- Recoja la votación.

EL C. SECRETARIO.- Sí señor presidente.

EL M. DE SILVA NAVA.- Conforme con los puntos primero y segundo, en contra del tercero.

EL M. MAGAÑA CARDENAS.- En contra de la negativa del amparo.

EL M. ALBA LEYVA.- Con el proyecto en congruencia con los votos anteriores.

EL M. ROCHA DIAZ.- En los términos del voto del M. De Silva.

EL M. AZUELA GUITRON.- Igual.

EL M. CASTAÑON LEON.- Conforme con el proyecto.

EL M. LOPEZ CONTRERAS.- Por la concesión del amparo.

EL M. FERNANDEZ DOBLADO.- Con el proyecto.

EL M. PAVON VASCONCELOS.- Con el proyecto y las modificaciones que se hicieron.

TRIBUNAL PLENO
JUNIO 8/1989

CUARTO TURNO
TEJEDA - ESPINAL

LA M. ADATO GREEN.- En contra y por la concesión del am-
paro.

EL M. RODRIGUEZ ROLDAN.- Con la consulta.

EL M. MARTINEZ DELGADO.- Con el proyecto modificado.

EL M. CARPIZO M.- En contra y por la concesión del amparo.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ.- Con el proyecto.

EL M. VILLAGORDOA LOZANO.- Con el proyecto y las modifi-
caciones aceptadas y propuestas por el señor ministro Schmill Or-
dóñez.

LA M. FLORES MORENO.- Con el proyecto modificado.

EL M. CHAPITAL GUTIERREZ.- En contra.

EL M. DIAZ ROMERO.- En los términos en que votó el señor
ministro De Silva.

EL M. SCHMILL ORDÓÑEZ.- En los términos en que votó el -
señor ministro De Silva.

EL M. PRESIDENTE DEL RIO RODRIGUEZ.- Con el proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- Empatado. Hay unanimidad con los pun-
tos primero y segundo. Está empatado, se aplaza hasta que se vuel-
va a formular un proyecto que haga.

EL M. SCHMILL.- En contra del tercer punto vota el M. -
De Silva, el M. Magaña, el M. Rocha, el M. Azuela, van cuatro, el
M. López Contreras, la M. Adato, el M. Carpizo, el M. Chapital, -
el M. Díaz Romero, yo creo que usted votó también por la...

EL M. PRESIDENTE.- Se aplaza la vista de este asunto.
De cuenta con el que sigue.

XII.- 6006/87 CONSULTA respecto al trámite que debe seguir
el recurso de revisión interpuesto por Petró-
leos Mexicanos, a que se refiere el toca - -
6006/87.

La ponencia es del señor ministro Schmill Ordóñez en el
sentido de que este Tribunal Pleno carece de competencia para co-
nocer del recurso. Se remitan el toca y sus anexos al Tribunal --
Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, --
Tabasco, para los efectos de su competencia.

TRIBUNAL PLENO
JUNIO 8/1989

CUARTO TURNO
TEJEDA-ESPINAL

EL M. PRESIDENTE.- Está a discusión el proyecto.
Si no hubiere objeción se consulta en votación económica. ¿Se aprueba?

A p r o b a d o.

En consecuencia, se declara: PRIMERO.- Este -- Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer del juicio de amparo en revisión 6006/87. SEGUNDO.- Remítanse el toca y sus anexos-- al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia-- en Villahermosa, Tabasco, para los efectos de su competen-- cia. Notifíquese y cúmplase.

Cont. 5o turno 1a. parte.

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

- 1 -

CONSULTA 2/89, respecto al trámite que debe seguir el recurso -- de revisión interpuesto por el Jefe del Departamento del Distrito Federal y otras autoridades a que se refiere el toca. La ponencia es del señor Ministro Rocha Díaz.

El proyecto propone: La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno carece de competencia legal para conocer del recurso de revisión a que este toca se refiere; devuélvanse el -- toca y el cuaderno de amparo con testimonio de esta resolución y demás constancias que se estimen necesarias al Sexto Tribunal -- Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.

EL M. PRESIDENTE: Está a discusión el proyecto?. -
Tiene la palabra el señor Ministro Villagordoa Lozano.

EL M. VILLAGORDOA LOZANO: Gracias señor Presidente.--
El juicio de amparo que es motivo base de esta consulta, yo estaba colaborando en el Departamento Central como Coordinador General Jurídico y participé en el informe justificado y en el aparezo también como persona autorizada para intervenir en el juicio de amparo, por lo tanto yo estoy impedido para participar en la discusión de este asunto.

EL M. PRESIDENTE: Está a la consideración de los señores Ministros el impedimento que hace valer el señor Ministro Villagordoa Lozano. Se admite por ser legal?.

Tome nota señor Secretario, se admite por ser legal el impedimento que hace valer el señor Ministro Villagordoa Lozano.

Tiene la palabra el señor Ministro Rocha Díaz.

- 2 -

EL M. ROCHA DIAZ: Gracias señor Presidente. Solamente para informar a los señores Ministros que he recibido y agradezco públicamente amables sugerencias, tanto del señor ministro Presidente como de la señora Ministra Adato para hacer algunas correcciones mecanográficas y de redacción en diversas fojas, que en modo alguno afectan el sentido de la consulta pero sí quisiera dejar informado a los señores Ministros de la existencia de estas correcciones que se harán al engrose en caso de ser aprobado el asunto.

EL M. PRESIDENTE: Continúa a discusión el proyecto? Si no hubiere objeción se consulta en votación económica, se aprueba?.

Aprobado.

En consecuencia, se declara: PRIMERO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, carece de competencia legal para conocer del recurso de revisión a que este toca se refiere. - - - SEGUNDO.- Devuélvanse el toca y el cuaderno de amparo, con testimonio de esta resolución y demás constancias que se estimen necesarias, al Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, con residencia en el Distrito Federal, para que resuelva en los términos precisados en el último párrafo del considerando que antecede. - - - Notifíquese y cúmplase.

Tome nota señor Secretario que no está presente la señora Ministra Moreno Flores. Dé cuenta.

AMPARO EN REVISION 2133/88, promovido por Acesco Instalaciones, S.A. contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación

- 3 -

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente en cuanto a su artículo 14 y del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La ponencia es del señor Ministro Alba Leyva.

El proyecto propone: Se revoque la sentencia recurrida, se sobresea en el juicio de garantías en relación con los actos que se indican para los efectos de su competencia precisados en el último considerando del proyecto; se remitan los autos con testimonio de la sentencia al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en Turno, con residencia en el Distrito Federal.

EL M. PRESIDENTE: Está a discusión el proyecto? - Tiene la palabra el señor Ministro Alba Leyva.

EL M. ALBA LEYVA: Gracias señor Presidente. A sugerencia de la señora Ministra Adato, que mucho agradezco, me hace la observación de que en la foja 30 en el tercer párrafo se dice que no ha sido costumbre que subsista en el recurso el problema de constitucionalidad y realmente no subsiste ya en el recurso ese problema, entonces si el proyecto merece la aprobación de sus señorías, se hará en el engrose correspondiente esa aclaración.

EL M. PRESIDENTE: Continúa a discusión el proyecto? Si ningún Ministro se pronuncia en contra, se consulta en votación económica, se aprueba?.

Aprobado.

En consecuencia, se declara: PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías en relación al artículo 14 de la Ley Orgánica de -

- 4 -

la Administración Pública Federal y del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - - - TERCERO.- Para los efectos de su competencia, precisados en el último considerando de esta resolución, remítanse los presentes autos con testimonio de esta sentencia al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en Turno, con residencia en el Distrito Federal. - - - Notifíquese.

Dé cuenta señor Secretario.

AMPARO EN REVISION 8/89, promovido por Excel-Lens, S.A., contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1988, y de Hacienda, ambas del Departamento del Distrito Federal, reformadas y adicionadas mediante los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1987, concretamente en cuanto a sus artículos 10., fracción I, inciso 6), 45-G, 45-H y 45-I, respectivamente. La ponencia es del señor Ministro Azuela Guitrón.

El proyecto es en el sentido de que sin perjuicio de lo indicado en el último párrafo del considerando segundo del proyecto, se deseche el recurso de revisión interpuesto.

EL M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Ponente.

EL M. AZUELA GUITRON: Gracias señor Presidente. Lo que solicita esta ponencia, es una corrección que amablemente me observó el señor Ministro Alba Leyva en el sentido de que el resolutivo debe decir "sin perjuicio de lo indicado en el penúltimo párrafo", porque en realidad como pueden ver, en la página 8 es el penúltimo párrafo y no el último.

- 5 -

EL M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Carpizo.

EL M. CARPIZO MCGREGOR: Gracias señor Presidente. Yo tuve oportunidad de platicar ampliamente con el señor Ministro - Azuela respecto a este proyecto, en mi opinión de la simple lectura del artículo 19, párrafo II de la Ley de Amparo, está claro que los Secretarios de Estado y el Jefe del Departamento del Distrito Federal tienen la representación del Presidente en los juicios de amparo porque si no fuera así, debería de haber terminado en punto final después de la expresión de "Procurador General de la República", además, siento que esta interpretación se ratifica con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con el artículo 27 de la Ley de Amparo respecto a notificaciones, ustedes conocen muy bien.

Así las cosas, mi primera impresión fue, y esto lo digo por alguno otro de los proyectos, que está claro que la representación del Presidente en los juicios de amparo depende, de acuerdo con la competencia, en los Secretarios de Estado y el Jefe del Departamento y mi primera impresión fue que el Secretario General de Gobierno no tiene la representación del Presidente - porque hay artículo expreso en el Reglamento Interior del Distrito Federal, el artículo 5o. fracción VIII donde se dice claramente que es una facultad no delegable del Presidente de la República, luego, siendo tan claro el artículo del Departamento del Distrito Federal, yo me inclinaba a votar en favor del proyecto en el punto resolutivo aunque en varios considerandos no estuviera de acuerdo, sin embargo cambié mi opinión al leer el anterior - artículo 19 de la Ley de Amparo, donde con toda claridad se decía

- 6 -

que la sustitución de los Secretarios de Estado, era de acuerdo con los Subsecretarios de Estado, los Oficiales Mayores. Me voy a permitir leer ese párrafo exactamente como estaba, dice: "En los términos que determine el propio Ejecutivo Federal, a través del Procurador General de la República por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo, a quienes en cada caso corresponde el asunto según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica y la Administración Pública, conforme los Subsecretarios, Secretarios Generales y Oficiales Mayores de las Secretarías y Departamentos durante las ausencias de los titulares de sus respectivas dependencias, etc., ^{Entonces} yo me pregunté cuál había sido la razón de la modificación de este artículo, y lo que encontré, no encontré la ^{Exposición de} Motivos de la iniciativa, pero encontré el dictamen de la Comisión respectiva del Senado y en mi opinión ellos fueron muy claros al decir, no a cambiar el sistema, sino que la sustitución quedaría de acuerdo a lo que dijeran los Reglamentos Interiores. ^Y si uno ve los Reglamentos Interiores de una serie de Secretarías de Estado que han sido expedidos este año, hay un artículo muy parecido al del Reglamento del Distrito Federal, donde dice que como atribución no delegable está representado el Presidente de la República en los juicios constitucionales en los términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, pero después se habla de la suplencia de los servidores públicos y el artículo 41 dice: "en los juicios de amparo en que debe intervenir en representación del Presidente de la República o como titular de la Secretaría, será suplido indistintamente por los servidores públicos antes señalados y en el orden indicado por el Director General de Asuntos Jurídicos Internacionales -

- 7 -

conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. fracción 23, de este Reglamento", pero lo que pasa con el Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal es que no ha sido cambiado, es del año de 1985, entonces en mi opinión si, en caso de ausencia, el Secretario General de Gobierno puede sustituir al Jefe del Departamento, además vi la jurisprudencia y los precedentes y lo que me encontré fue que el Pleno de la Suprema Corte lo ha admitido, sin embargo hay discusión cuando el Reglamento Interno de X Secretaría decía que quien bien entra en cargo en caso de ausencia es X Subsecretario y quien venía con la representación del Presidente era un Subsecretario diferente, estoy muy sensible de que esto es un tema que se ha discutido reiteradamente y que el propio Tribunal no tiene un criterio claro como se desprende del documento que leyó el señor Ministro Azuela en el caso de la ponencia del señor Ministro Magaña, por lo tanto yo le comentaba al señor Ministro Azuela que llegué a la conclusión de que sí en caso de ausencia el Secretario General de Gobierno del Distrito Federal puede sustituir al Jefe del Departamento.

EL M. PRESIDENTE: Quiero hacer una aclaración que es la siguiente, efectivamente el aspecto que ha invocado el señor Ministro Carpizo, se ha discutido en multitud de ocasiones pero ahora hay un aspecto nuevo que nada más se ha discutido en una ocasión y fue aprobado el criterio que presentó el señor Ministro de Silva Nava, proyecto que se cita en la página ocho de este proyecto de que si es necesario o no el oficio del Presidente de la República señalando quien debe sustituirlo.

- 8 -

Tiene la palabra el señor Ministro Rodríguez Roldán.

EL M. RODRIGUEZ ROLDAN: Gracias señor Presidente, -
Lo único que yo tengo aquí es una duda que deseo poner a la consideración de ustedes, en el proyecto se propone que, como la sentencia fue notificada por conducto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, procede que el Juez de Distrito Ordene se notifique el referido fallo por conducto del Procurador General de la República pero pues, se me ocurre que el Ministerio Público - está representado en el juicio por conducto del Agente adscrito al Tribunal, ese Agente del Ministerio Público de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo, está facultado para interponer recurso y esta sentencia, según aparece aquí del expediente, fue notificada al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal, yo me pregunto si es preciso que sea el Procurador General de la República en persona quien reciba la notificación, - lo cual nunca ocurre.

CONTINUA SEXTO TURNO

...es preciso que sea el Procurador General de la República en persona, quien reciba la notificación lo cual nunca ocurre porque aunque el oficio respectivo se llevara a la residencia oficial nunca le sería entregado personalmente, o si, como aquí aparece puede ser válidamente notificado a través del representante permanente que tiene en el Tribunal Colegiado correspondiente, de tal suerte que no veo la necesidad de que se repita una notificación que ya quedó hecha.

EL M. ROCHA DIAZ: Gracias señor presidente. Quiero tomar unos minutos de la atención de sus señorías para hacer una, lo más breve posible, exposición de las razones por las cuales estoy en contra de esta consulta y de las siguientes siete que vienen en la lista de hoy. En primer lugar considero que debemos reconocer que existe motivo fundado de duda sobre la correcta interpretación del segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, obviamente este motivo fundado y duda, pues aparece inclusive, en la propia actuación del titular del poder ejecutivo, del Procurador General de la República, de los señores Secretarios de Estado y jefes de Departamento por lo que las actuaciones contradictorias de ellos no deberían de servir de argumento ni en un sentido ni en otro; en la consulta el señor ministro Azuela, muy acuciosamente nos da cuatro precedentes y el día de ayer surgió otro espontáneamente, los cuales, efectivamente, el titular del ejecutivo designó representante por conducto del Procurador General de la República, pero tenemos otras ocho consultas en que no lo hizo, quiere decir que necesitaríamos otras cinco, y lo único que prueba esto no es la correcta interpretación del precepto, lo único que prueba esto es el motivo fundado de duda y la necesidad de que este honorable Pleno declina en ejercicio de sus facultades cual es la interpretación del mismo. En este Pleno hemos recibido

inclusive, dos testimonios de quienes estuvimos encargados de las áreas jurídicas de dependencias del ejecutivo, el señor ministro Villagordoa, procurador jurídico que fue del Departamento del Distrito Federal, nos dio testimonio en el sentido de que en los amparos en que intervenía el Departamento del Distrito Federal siempre se tramitaba o siempre se actuaba en función de una designación expresa que hacía el Procurador General de la República. Yo dí mi testimonio y ahora lo ratifico, de que la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación, no esperábamos ni recibíamos normalmente oficios de la Procuraduría General de la República, sino que éramos notificados por los jueces de Distrito y con base en las disposiciones del reglamento interior de la secretaría de gobernación. El secretario de Gobernación rendía el informe que correspondía al titular del ejecutivo federal. Quiere decir que el propio artículo 19 está siendo interpretado en algunos casos, por algunas secretarías en una forma y en otros en la otra, pero eso no nos llevaría a darnos luz respecto de cuál es la correcta interpretación y simplemente lo menciono por cuanto es un argumento que presenta el señor ministro Azuela que lo único que viene a acreditar es la existencia de la duda.

Por otro lado, considero que para resolver esta duda y fijar la correcta interpretación de este precepto deben tenerse presentes varios datos, en primer lugar el estudio de la naturaleza y efectos de la institución jurídica que es materia del artículo y que lo es la representación. En segundo lugar, un principio general de derecho que nos lleva a optar por aquella interpretación que resulte compatible con los mandatos y otras normas de las que integran el orden jurídico nacional y entre ellas, la Ley Orgánica del Departamento del

Distrito Federal. Por otro lado, la necesidad de hacer una interpretación ya dentro del ámbito exclusivo de la ley de amparo porque aun cuando no fue muy explícito el señor ministro Carpizo en alguna conversación que tuvimos con él en la Tercera Sala, nos aportó un argumento muy valioso que está basado en el texto del artículo 27 de la propia ley de amparo. Voy a hacer una referencia muy breve a estos temas que permitiría fijar la interpretación que considero correcta y que propongo a este honorable Pleno. En primer lugar, la representación es una figura jurídica en la que por mandato de la ley o por mandato de las personas, una actúa a nombre de otra en términos tales que el principio básico de que los actos imputan en la persona, el patrimonio de la persona que lo celebra en este caso, los gastos de representación, las consecuencias patrimoniales impersonales de los actos realizados por unos se imputan a otros en razón de esta institución. Tratándose de representación legal la norma misma señala quiénes son los representantes de incapaces, en el caso de la representación voluntaria pues son los representados quien tiene libertad absoluta para designar a sus representantes, salvo las limitaciones que la ley le señala; predominantemente el derecho señala limitaciones de la posibilidad de que sea de derecho de representación en relación no a personas sino a actos y así se prohíbe que se otorgue representación voluntaria para ciertos actos porque el legislador ha considerado necesario que en tales situaciones sea el directamente interesado el que actúe y no sea otro el que actúe en su nombre. Así lo encontramos por decir, en otros casos, en el caso de testamento por conducto de representantes, en el caso de asistencia a junta de aveniencia, en divorcio voluntario donde difícilmente puede avenir el representante con la esposa o con el esposo y se hace necesaria la comparecencia de ambos pero muy excepcionalmen

te y este, creo, es uno de los poquísimos casos, se establece una limitación a la manera de otorgar la representación. Debe en consecuencia tomarse con especial cuidado esta aparente o esta limitación que tiene el jefe del Poder Ejecutivo para designar a sus representantes. La limitación debe precisarse en función de los elementos propios del texto del 19, que lleva a los señores ministros ponentes, en este momento al señor ministro Azuela a decir quién tiene que ser por conducto del Procurador General de la República y a mí me gustaría plantear que tiene dos limitaciones el titular del Poder Ejecutivo: uno, debe hacerlo por conducto del Procurador General de la República y, dos, solamente puede hacerlo a favor del secretario de Estado o jefe de departamento a quien le corresponda la materia y habría una doble limitación al ejercicio de esta facultad de otorgar la representación. Creo que para esto sería indispensable ver cuáles son los textos de los demás preceptos legales que estarían relacionados con esta aparente doble limitación. Por un lado, el texto de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que nos dice en el artículo 14, párrafo final; "en los juicios de amparo el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a quien corresponda el asunto según la distribución de competencias, y confirmaría la segunda limitación, no la primera. El artículo 18 nos dice; en el reglamento interior de cada una de la secretarías de Estado y asuntos administrativos... (leyó); y esta disposición del 18 contrariaría la interpretación de que la expresión de que por conducto del Procurador General de la República, es una limitación a la facultad de representación del Presidente de la República.

Por otro lado tendríamos que en ejercicio de esta facultad reglamentaria interior que el Presidente tiene conforme al

artículo 18 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, en todos los reglamentos interiores, existe siempre la disposición de que el titular de la secretaría o departamento tiene como facultad no delegable, representar al Presidente de la República en los juicios de amparo, y dado que en el nivel normativo ese reglamento interior viene siendo ya una norma de aplicación de las previsiones, quiere decir que el Presidente está ejercitando su derecho en el representante, en el propio reglamento interior desde el punto de vista genérico y que la expresión, por conducto del Procurador General de la República, no constituye una limitación alguna sino que habrá de interpretarlo en función del resto de las normas involucradas.

El artículo 27 de la Ley de Amparo dice, en su tercer párrafo, "las notificaciones aplicadas al Poder Ejecutivo se entenderán con el secretario de estado o jefe administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo o en su caso, con el Procurador General de la República de acuerdo con el artículo 19 de esta ley. Y si llegáramos a la conclusión que el señor ministro ponente nos propone, el artículo 27 tendría un texto contradictorio con el 19, debería decir, "las notificaciones se practicarán, la primera vez al Procurador General de la República y después a los secretarios de estado que hubieran sido designados como representantes del ejecutivo. En caso de que tal cosa hubiera sucedido, pero de lo contrario, todas las notificaciones deberían ser hechas al único representante que podía tener, o sea, el Procurador General de la República o al propio Presidente directamente. ¿Qué sucede en nuestros juicios de amparo y cuál es la gravedad de que este honorable pleno se pronunciara a favor de la consulta que se nos presenta? pues que en un altísimo porcentaje los procedimientos del juicio de amparo estarían viciados. Puedo dar testimonio, el señor ministro

Villagordoa lo haría también el suyo, de que en la Secretaría de Gobernación, durante los tres años que fui director de asuntos jurídicos, se recibieron las notificaciones al Presidente de la República pues en número de unos tres mil a tres mil quinientos amparos por año, estas notificaciones nos llegaban directamente de los señores jueces de Distrito, por qué, pues porque el señor juez de Distrito aplicaba el artículo 27 y decía: "la notificación se la hago al secretario de estado que le corresponda según el ramo," y entonces nos notificaba a la secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, en ejercicio de la facultad que le otorgaba el reglamento interior, procedía a formular el informe justificado conforme, sin intervención del Procurador.

Si el Pleno se llegara a pronunciar en el sentido de la consulta, tendría en cada caso ver si efectivamente está debidamente notificado el titular del ejecutivo porque en todo aquel caso en donde no se hubiera llevado la notificación a la residencia del ejecutivo o mínimamente al Procurador de la República estarían viciados, como en el agregado que ha comentado el señor ministro Rodríguez Roldán. Resulta ¿quién resuelve? ¿en dónde se practica la primera notificación al titular del poder ejecutivo? En algunos casos el propio juez de Distrito lo dice en su auto, en otros casos, simplemente dice, notifíquese, y es el actuario el que lo decide y el actuario qué aplica, pues el artículo 27 y la mayor parte de las notificaciones no están hechas en palacio Nacional, sede oficial del titular del Poder Ejecutivo Federal, no están hechas en palacio nacional y esto lo podrían comprobar fácilmente con la revisión de cualquiera de los asuntos de primera instancia que tenemos a nuestra vista, si no están hechas en algunos casos al Procurador General de la República, en muchos otros directamente ante

la secretaría de estado cuyo ámbito material de competencia le permite recibir a juicio o del secretario o del propio juez de Distrito la primera notificación, notificación que realmente sería nula si consideramos que la representación solamente puede ser otorgada por conducto del procurador general de la República.

Yo veo una interpretación armónica de la disposición cuyo texto, obviamente han llevado los señores ministros ponentes a proponer el desechamiento de los recursos de revisión con el resto de las disposiciones de nuestro orden jurídico nacional y de la propia ley de amparo, nos llevaría a decir, el presidente está legítimamente representado por los secretarios de estado en los ramos correspondientes por que así lo ha decidido de acuerdo al 19 por conducto de sus reglamentos interiores, y por eso son válidas las primeras notificaciones realizadas ante los secretarios de estado o jefes de departamento. En caso de duda, ésta tendría que resolverse por el propio titular del ejecutivo federal y por conducto de la procuraduría general de la república.

Yo sí quiero llamar especialmente la atención a los señores ministros en el único argumento aportado por el señor ministro Jorge Carpizo en el sentido de que la disposición del artículo 27 es muy alentadora, correcta, eficaz y adecuada interpretación del segundo párrafo del artículo 19.

EL M. PRESIDENTE: Continúa a discusión el proyecto.

SIGUE EN EL SEPTIMO TURNO

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.-
González Ch.-Hernández A.

EL M. ALBA LEYVA: Gracias señor Presidente. Unicamente para referirme a la duda que nos plantea el señor Ministro Rodríguez Roldán, en el sentido de que - en el caso específico no debe notificarse la sentencia recurrida a la Procuraduría General de la República, y - al respecto como lo llamó el señor Ministro Rocha el -- tercer párrafo del artículo 27, categóricamente establece que las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderá con el Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo que deba representar en el juicio de amparo, o en su caso con el Procurador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera, que se haya cumplimentado tal disposición, las subsecuentes notificaciones - se harán directamente a los funcionarios designados --- quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la República deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la Presidencia, entonces, conjugando el artículo 19, con el 27, fracción III, creo yo que, - si es necesario notificar al Procurador General de la - República la sentencia recurrida, ya que la mera notificación hecha al Ministerio Público adscrito, no cumple los requisitos marcados por el tercer párrafo del 27, - ya que no obstante que el Ministerio Público goza de -- inmunidad, es decir, es una institución en la que existe unicidad, de cualquier manera la Ley de Amparo, se - refiere categóricamente no a la Procuraduría General de la República, sino al Procurador General de la Repúbli

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.-
González Ch.-Hernández A.

ca, a tal punto que dice que las notificaciones deberán ser hechas por medio de un oficio remitido a su residencia oficial.

EL M. DE SILVA NAVA: Respecto de la interpretación del párrafo tercero del artículo 27, de la Ley de Amparo, puede llegarse a una conclusión muy diversa, a la que señala el señor Ministro Rocha, las notificaciones al Poder Ejecutivo se entenderán por medio del Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo, que debe representar en el juicio de amparo, o -- en su caso -- se está hablando de un caso -- con el Procurador General de la República, cuál es ese caso, cuándo son notificados los Secretarios, cuándo es por conducto del Secretario de Estado o Jefe del Departamento, y --- cuándo es el caso en que debe ser notificado por conducto del Procurador General de la República.

Yo entiendo que el caso en que deba ser por conducto del Procurador General de la República, es precisamente la primera notificación, si el Procurador General de la República, si el Presidente no le otorga por conducto del Procurador, pues no se sigue notificando ni a los Secretarios de Estado, ni a los Jefes de -- Departamento, porque el Presidente no les otorgó su representación.

Por otra parte, el hecho de que en un -- reglamento interior se otorguen estas facultades al Jefe del Departamento del Distrito Federal; no es necesariamente que se haya otorgado una representación para todos y cada uno de los asuntos, porque en ese reglamento se habla de facultades del Jefe del Departamento del Distrito Federal para representar al Presidente de la --

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.
González Ch.-Hernández A.

República en términos de la Ley de Amparo, no está diciendo en todos los casos, está diciendo en los términos de la Ley de Amparo, cuáles son los términos de la Ley de Amparo, los términos de la Ley de Amparo, es que el Presidente pueda ser representado por los funcionarios a que se refiere cuando alguna designación por conducto del Procurador General de la República, no puede hablarse de que se otorgue una representación general absoluta, porque entonces también saldría sobrando el artículo 19, bastaría que se dijera el Presidente de la República será representado, cómo podrá ser representado por cualquiera de los Secretarios de Estado o Jefes de Departamento en el asunto correspondiente, y con eso quedaría --- obviamente una representación general y absoluta para cualquier caso, pero si la ley se refiere precisamente a que la voluntad del Ejecutivo se manifieste por conducto del Procurador, obviamente se está refiriendo a cada caso concreto y en cada caso concreto deberá el Procurador General hacer la manifestación y la manifestación correspondiente.

Yo no veo ningún problema de oposición del artículo 19 y el artículo 27, si damos una interpretación congruente, claro que si queremos interpretarla de tal forma que se produzca la oposición, --- pues si lo graremos que exista la oposición pero si encontramos una interpretación que no suponga la contradicción de dos preceptos, pues creo que sería la-

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.
González Ch.-Hernández A.

interpretación más correcta, hay que hacer notar que - el artículo 19, en primer término no se está refiriendo a aspectos procesales como son las notificaciones, - se está refiriendo a problemas en representación, el - artículo 27, no se está refiriendo a problemas de re-- presentación, se está refiriendo a la forma de realizar determinado tipo de notificación, y si entendemos que - el artículo 27, se refiere a notificación al Procura-- dor la primera y la subsecuente mientras el Procurador no designe al funcionario que deberá representar al -- Presidente de la República, o interpretamos que los Se-- cretarios y Jefes de Departamento, serán quienes reci-- ban las notificaciones una vez que hayan sido designa-- dos por el Procurador, entonces, nos encontramos con - que no hay ninguna contradicción entre los dos precep-- tos.

Los demás argumentos ya los he dado en otras ocasiones, se reitera en el proyecto, y no creo el momento necesario insistir por lo menos en ellos.

EL M. PRESIDENTE: Está suficientemente discutido.

EL M. AZUELA: Aunque en realidad en la discusión de esta ponencia están involucradas varias, - y por lo mismo debieran ser los respectivos ponentes - los que hicieran su defensa, por razón de orden me toca a mí defender esta ponencia. En discusiones que tenía-- con mi padre, -en cuestiones jurídicas- me dio un conse-- jo que en términos generales me ha sido muy provechoso lee con cuidado los preceptos, y esto me fue valedero-- mientras no llegue a tener experiencia en órganos cole

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.
González Ch.-Hernández A.

giados jurisdiccionales, en la medida en que se lee con cuidado un precepto, y se llega a la conclusión de que es muy difícil ponerse de acuerdo, a mí me parece que algo de esto está sucediendo con este problema del artículo 19, si como apuntó el señor Ministro de Silva Nava, queremos establecer la conclusión antes de analizar el problema, es como el novelista de novelas policiacas que determina quies es el criminal, y luego todo lo va conduciendo a ese final previamente establecido, si queremos establecer que al Presidente de la República se le puede representar con la mayor liberalidad, pues podemos dar toda una serie de contenidos al artículo 19, y los haremos concatenar con otras disposiciones de otras leyes, por ello pienso que debemos proceder a la inversa, el artículo 19, es el elemento objetivo que tenemos, en primera considero, que es el elemento substancial que tenemos que acudir, porque se trata de la ley aplicable, de acuerdo, y que en la Ley Orgánica se establece dentro de las facultades de las autoridades algo genérico, sino se otorga dentro de las facultades genéricas a un Secretario de Estado la facultad de representar al Presidente de la República pues se plantearía el problema de que Ley de Amparo está reconociendo algo que la propia Ley Orgánica no le reconoce, de tal modo que esa facultad genérica perfectamente se concatena con lo que dice la Ley de Amparo, a la inversa, es donde surge el problema porque la Ley Orgánica dice que el Presidente de la República será representado por los Secretarios y Jefes de Departamento Administrativo, ya sale sobran-

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.
González Ch.-Hernández A.

do lo que dice el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el artículo 19, de la Ley de Amparo, establece una frase que es en la que está radicando toda la discusión, y que si algo no podemos hacer es negar su existencia, cuál es la regla general en materia de representación de autoridades responsables, la regla general la da el primer párrafo, y para mí es donde su importancia porque estamos ante una excepción, y la excepción debe interpretarse en forma restrictiva, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, esa es la regla general, lo demás ya son excepciones, si podrán por medio de simple oficio acreditar delegados, acreditar delegados pueden hacerlo por medio de simple oficio, pero se sigue conservando la regla general, no pueden ser representados en el juicio de amparo, y luego viene el párrafo que está motivando nuestras discusiones. Cuando el señor Ministro de Silva Nava, presentó su ponencia seguramente recordarán los integrantes de este Pleno que yo tuve una intervención en contra de su ponencia, pero leí con cuidado el artículo, y el artículo lo hemos leído muchas veces, en todas las ponencias se transcribe y dice: No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior regla general, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, y aquí viene la frase en los términos que determina el propio Ejecutivo Federal por conducto del Procurador General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo, a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de-

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.
González Ch.-Hernández A.

competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no habría problema en --- cuando a la intención del legislador, si quitamos esa frase: "en los terminos que determina el propio "jecutivo Federal, por el conducto del Procurador General de la República", le borramos eso, y entonces las intervenciones de los señores Ministros Carpizo y Rocha, adquirirían toda fuerza, porque entonces si se vería - que hay perfecta congruencia, pero si existe esa frase, es porque tiene algún significado, y para mí el significado se deriva de la naturaleza propia de la Procuraduría General de la República. El Presidente de la República tiene tal cúmulo de ocupaciones que sería absurdo pretender que él conforme a la regla general del -- artículo 19, estuviera directamente actuando en los juicios de amparo, pero hay dentro de sus colaboradores - un funcionario que tiene la responsabilidad jurídica - del "jecutivo Federal, y ese funcionario es el Procurador General de la República, los juicios de amparo involucran la responsabilidad del Ejecutivo Federal en - todos aquellos asuntos en los que los particulares han estimado que se suceden violaciones a sus garantías -- individuales, de manera tal que yo veo congruente que se canalice una responsabilidad a través del Procurador General de la República, el Procurador General de la República, es el conducto a través del cual el Ejecutivo Federal debe designar a quien lo va a representar en cada juicio de amparo, lo que significa necesar-

TRIBUNAL EN PLENO.
8 de junio de 1989.

TURNO SEPTIMO.-
González Ch.-Hernández A.

riamente que dentro de la responsabilidad de ese funcio-
nario, está tener conocimiento de cuántos juicios de am-
paro existen, en qué materias, a qué Secretarios de Es-
tado corresponden, etc. etc., y esto es lo que se ha --
entendido por parte de la Procuraduría General de la --
República, aquí sólo a manera de paréntesis me refiero-
al argumento que dio el señor Ministro Rocha, según el -
cual tenemos una estadística que en principio es favora-
ble a la interpretación que él propuso.

S.TURNO OCTAVO.-

.....

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

....me refiero al argumento que dí al señor Ministro Rocha según el cual tenemos una estadística que en principio es favorable a la interpretación que él propuso. Bueno, yo debo decir que los setenta y tantos u ochenta y tantos asuntos, en relación con este impuesto de nóminas, tengo en mi ponencia, en setenta y tantos venía el documento relacionado con el Secretario, con el Procurador General de la República, manifestando al Jefe del Departamento del Distrito Federal, que debía representarlo. Esto es lo normal en la mayoría de los casos y más bien lo excepcional, es que falte este documento, pero estaríamos, y en esto sí estoy de acuerdo con el señor Ministro Rocha, ante problemas de interpretación que se dan por parte del propio Ejecutivo y no deben ser las situaciones de hecho, las interpretaciones concretas de los funcionarios las que nos llevan a una conclusión sobre el particular, yo simplemente quiero sostener mi ponencia, porque no veo como podemos eliminar una clara determinación que aparece en el artículo 19 de la Ley de Amparo. No se está diciendo que el Ejecutivo Federal podrá ser representado por el Procurador General de la República, Los Secretarios de Estado y Jefes del Departamento Administrativo, sino que -- por conducto del Procurador General de la República, esté referido a los términos que el propio Ejecutivo Federal determine quien lo va a representar en cada caso. Y esto, no creo que pueda superarse con las interpretaciones que se han hecho; las interpretaciones que respecto obviamente, tanto del señor Ministro Carpizo, como del señor Ministro Rocha, llevarían a que cubriéramos con un velo esa expresión y dijéramos, esto no lo dice el artículo; lo del artículo 27 de la Ley de Amparo, coincide con el señor Ministro De Silva. Qué es lo que está diciendo, si en el ca

TRIBUNAL EN PLENO
Junio/8/89.-

8o.-Turno.-
Espinal.-Tejeda.-

so ya se designó representante al Secretario x, pues entonces las notificaciones tendrán que seguirse haciendo a ese Secretario, ahora la experiencia que tuvo el señor Ministro Rocha y con esto concluyo en la Secretaría de - Gobernación probablemente nos explicara más bien un problema de poder político de determinados funcionarios, -- que un problema de interpretación jurídica del artículo 19.

EL M. ROCHA:- Gracias señor Presidente, creo que abusé cuando estaba volteado el señor Presidente, - para hacer uso de la palabra, pero pienso hacerlo muy brevemente, yo vería aquí dos cuestiones muy brevemente expuestas, por un lado el argumento del señor Ministro De Silva, por otra parte del señor Ministro Azuela, en el sentido de que el tercer párrafo del artículo 27 es muy fácil de interpretarlo diciendo que el Ejecutivo - se entenderá con los Secretarios ó en el caso del Procurador General de la República y diciendo que este caso es cuando no hay designación, esto tendría dos objeciones muy claras, la primera pues que la generalidad es la hipótesis y el caso es la excepción, lo que contraviene la interpretación que ustedes están dando al artículo 19 segundo párrafo de la Ley de Amparo, pero lo más grave de eso, de donde saca el Procurador General de la República la representación del Presidente, - no se lo otorga el 102 constitucional, de donde saca - la representación él; lo único que le exige el 19, es - que sea el conducto, según la interpretación de los proyectos pero no tiene la representación titular del Ejecutivo, es más, el titular del Ejecutivo si quiere designar al Procurador, tendrá que designarlo o bien, es

tablecerlo en el Reglamento de la Procuraduría General de la República, pero el Procurador General de la República no tiene la representación del titular del Ejecutivo y no hay disposición del titular del Ejecutivo y no hay dispo-sición alguna que así lo establezca, primera. Segunda cuestión, veamos la evolución del artículo 19 de la Ley de Am-
paro y veámos cuál fue el ánimo del legislador al incorpo-
rarlas modificaciones que incorporó en el año de 86, según
el texto vigente del 36 en adelante. Las autoridades res-
ponsables no podrían ser representadas y sólamente por ofi-
cio podían acreditar delegados en las audiencias. En la Re
forma de 43, se mantiene el primer párrafo que subsiste has-
ta la fecha y se agrega un segundo párrafo que dice: no --
obstante los supuestos del párrafo anterior, el C. Presi-
dente de la República podrá ser representado en todos los
trámites de esta ley, por los Secretarios de Despacho y -
Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada ca-
so corresponde el asunto, según la distribución de compe-
tencia establecidas en la vigente Ley de Secretarías y De
partamentos de Estado. Quiere decir que este texto coinci-
diría exactamente con la postura que sostiene el señor -
Ministro Carpizo y el de la voz. Viene la reforma de di-
ciembre de 49, y mantiene el primer párrafo idéntico pero
agrega: "ó por el Procurador General de la República cuan-
do el titular del Poder Ejecutivo le otorga su representa-
ción en los casos relativos a la dependencia a su cargo. Y
luego viene el texto vigente publicado en el Diario Ofi-
cial el 20 de mayo de 86. Y de donde surgió esta Reforma?.
Y porqué surgió esta Reforma?. Y los señores Ministros -
aquí presentes mejor que yo, porque no tuve la oportunidad
de participar en esa Reforma y ahora he de explicar porqué.
Como surge esta Reforma?. Esta Reforma surge por la pro-

puesta de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacer algunos ajustes a la Ley de Amparo. En una colaboración entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, se inician una serie de reuniones para los efectos de precisar algunas de las reformas necesarias y el Ejecutivo, en aquél entonces representado por Pedro Astudillo en la Presidencia de la República, el licenciado Sánchez Arroyo --- plantea el problema que está viviendo y que el Poder Judicial suplía, que era la rigidez del precepto vigente desde el 49, el Juez de Distrito, cómo le hago, aquí hay dos materias, a quien notifico?. Porqué me dejas a mí el problema? Asímelo tú. Entonces el Ejecutivo dice: De acuerdo, vamos a reformar para los efectos que se diga, en los términos que determina el propio Ejecutivo Federal. Y ciertamente el señor Procurador General de la República dice: sí, yo soy el consejero jurídico de la nación de acuerdo con el artículo 102, que sea por mí conducto y con eso se integra este texto que ha provocado más dificultades que aportado beneficios, pero el debate en la Cámara de Senadores como bien lo ha dicho el señor Ministro Carpizo es muy esclarecedor, en modo alguno se pretende que caso por caso en forma genérica y por el exclusivo conducto del Procurador General de la República, el Presidente puede otorgar su representación sino en el debate, se precisa que los reglamentos interiores, son conducto idóneo para que el Presidente ejercite esta facultad de otorgar su representación como lo precisa el artículo 19. Ciertamente que el texto quedó muy mal, que propicia que una interpretación literal lleve necesariamente a la conclusión a la que llegue el señor Ministro ponente. No podríamos decir que la interpretación literal no nos lleve a esas conclusiones, obvio que nos lleva, pero la interpretación jurídica de esto

que tiene como función ver si el texto claro de suyo responde a la armonía necesaria entre las disposiciones existentes en un orden jurídico y logra la satisfacción de la necesidad socio-político económica que deba entender el precepto, y si nos quedamos exclusivamente en la interpretación literal, pues vamos a generar una confusión verdaderamente grave; yo creo que, a diferencia de como se decía en el pasado, in-claris non interpretatium, las doctrinas modernas de interpretación dicen: toda norma debe ser interpretada, porque el texto claro que normalmente se va a presentar en la norma pues requiere matizarse para que conserve su congruencia con el resto de las disposiciones que integran un ordenamiento o un orden jurídico y atendiendo fundamentalmente a la satisfacción de la necesidad social a la que el precepto está dirigido. Yo considero muy grave que por someternos a la letra exclusiva de la ley, digamos que la representación del titular del Ejecutivo Federal sólo puede ser otorgada por conducto del Procurador, porque eso nos hace nugatoria la disposición del 27, todas las primeras notificaciones absolutamente? que tendrían que ser exclusivamente listadas?

EL M. PRESIDENTE:- Señores Ministros, consulto si agotamos la discusión o si se levanta esta discusión son las dos y media. Agotamos la discusión?

Tiene la palabra el señor Ministro Carpizo.

EL M. CARPIZO:- Gracias señor Presidente. Me propongo ser extraordinariamente breve y me propongo decir poco, sino más bien leer. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Ministro Azuela, hay que leer los artículos y leyendo los artículos puede venir la interpretación. Hemos hablado del artículo 19, y nos hemos referido al párrafo uno y dos, pero no nos hemos referido al párrafo tres y cuatro, voy a empezar por el párrafo cuatro, no lo voy a

interpretar nada mas lo voy a leer, después voy a leer el párrafo tres no lo voy a interpretar, nada más a leer. Dice el párrafo 4 del 19: En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también, representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esa atribución el reglamento de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría.

Ahora voy a leer el párrafo tercero: que respecto a la suplencia, creo que es muy claro: En estos casos, se esté refiriendo a las dos hipótesis de el párrafo segundo del 19, en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éste podrá ser suplido por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada Ley Orgánica. Ahora bien, los que reformaron este artículo que yo coincido con el Ministro Rocha, crearon más confusión y dijeron específicamente en su dictamen pero fueron tres personas ligadas con el Poder Judicial Federal. Dos Ex-Ministros y un actual Magistrado de Circuito, y dijeron esto. Otra reforma hecha por estas condiciones al texto del artículo 19 que en apariencia es de mera corrección formal tiene trascendencia de fondo y se refiere a la representación del C. Presidente de la República, como autoridad responsable en los juicios de amparo. Tal reforma consiste en otorgar personalidad a los inmediatos colaboradores del titular del Ejecutivo de la Unión, ello, en los términos de la respectiva competencia señalada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en respetar la substitución de titulares de las dependencias tal como lo prevén los reglamentos interio

res de las mismas, igual substitución se prevé para el C. Procurador General de la República, en los casos en que sea designado como autoridad responsable. Y lo último que voy a leer, un precedente. Hay muchos de este H. P. eno, pero nada más voy a leer uno; porque en mi opinión, es el más claro de todos. -- Fue en el Amparo en Revisión 1531/80, dice: "PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. REPRESENTACION DE EL, EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una correcta interpretación del segundo párrafo del artículo 19, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que para que opere la representación del Presidente de la República, basta con que quien la ejerza sea el Secretario o Jefe del Departamento a quien corresponda el asunto, según la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ello s in perjuicio de que el propio Ejecutivo Federal pueda, cuando así lo acuerde expresamente, otorgar su representación por conducto del Procurador General de la República, y dar instrucciones acerca de los términos en que debe -- ejercerse." Gracias.

EL M. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro Villagordoa.

EL M. VILLAGORDOA.- Gracias señor Presidente. Señores Ministros. En vista de que el señor Ministro Rocha Díaz, involucró con relación a mi proyecto. Yo quisiera manifestar y reiterar a l o que dije anteriormente en el asunto que se votó del señor Ministro.....

- - - - -

Sigue 9o. Turno)

... Carlos de Silva. El Departamento del Distrito Federal y la Comisión Jurídica, nosotros exclusivamente actuábamos o preparábamos informes justificados, no nada más a nombre del Jefe del Departamento, sino también del Presidente de la República cuando decidíamos que generalmente se hacía ya también en la Procuraduría General de la República, para hacerlo ya en una forma bastante rápida, enviar una copia del original del oficio en que el Procurador se dirigía al Jefe del Departamento manifestando que el acuerdo que tenía con el presidente, se designaba un representante para que en este amparo se le representara en todas sus instancias, y solamente en estos casos, lo hacían en desacuerdo, porque en otros muchos casos, aun cuando eran autoridad responsable el Presidente y el Jefe del Departamento, también lo era al conocer la materia de amparo el Inspector por actos propios del Jefe del Departamento, si no lo entendemos nosotros, esa representación del presidente, nunca formulábamos esa situación, a mí me da la impresión de que los señores Jueces de Distrito con toda atinencia, lo han hecho en el sentido de que cuando se designa como autoridad responsable al señor presidente de la República, la primera notificación a que se refiere el señor ministro de Silva, se la hacen directamente a la Procuraduría General de la República y dice el Procurador General de la República y luego hace esa comunicación directa al titular y manda copia a las áreas jurídicas de las dependencias, para que con toda oportunidad puedan rendir los informes, esa es la situación concreta que yo ví, por lo tanto, yo si estoy conforme, estoy de acuerdo con la ponencia.

M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro Díaz Romero.

- 2 -

M. DIAZ ROMERO: Gracias señor presidente, -- trataré de ser breve, me siento de alguna manera obligado a participar en la discusión, porque en la vez pasada en que se presentó la ponencia del señor ministro de Silva, en que se planteó por primera vez la interpretación del artículo 19 como se viene interpretando en los proyectos ahora presentados, voté en contra, y digo que voté en contra, porque mis razones fueron porque no había yo reflexionado sobre los términos de cómo está actualmente el artículo correspondiente, me había quedado la impresión muy grande respecto de cómo estaba antes de la reforma este artículo es, yo creo, uno de los más manipulados dentro de la Ley de Amparo, ha tenido varias reformas de ellas que son cinco o seis, me voy a referir solamente a dos de ellas, porque me parece que son las que más pueden aprovechar, en mil novecientos sesenta y siete, se reformó el artículo 19 y se estableció sobre la exposición de motivos lo siguiente que voy a leer, los artículos dicen, entre los cuales está el artículo 19: "persiguen la finalidad de lograr procedimientos más breves y sencillos en la tramitación de los juicios de amparo y de ese modo hacer efectiva la meta de una justicia pronta y expedita en la jurisdicción federal en su función máxima de lograr que por encima de leyes y actos inconstitucionales de autoridad, prevalezca el principio de la supremacía de las normas jurídicas fundamentales y la afectividad del goce y disfrute de las garantías individuales", y el artículo 19 en aquella ocasión, decía -- el segundo párrafo, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el C. Presidente de la República, podrá ser representado en todos los trámites de esta ley por los Secretarios y Jefes de Departamento de Estado a quienes--

- 3 -

en cada caso corresponda el asunto según la distribu- --
ción de competencias establecidas en la Ley de Secreta--
rías y Departamentos de Estado, me voy a quedar hasta --
acá, porque lo siguiente ya involucra otra cuestión que--
es de representación o sustitución, esta reforma duró --
pues bastante tiempo, duró casi diez años y es con la que
yo me había quedado, para mí esta reforma implica de una
manera clara, que hay una representación automática, di-
gamos por cuestión de materia en que el Presidente de la
República, en relación con los Secretarios de Estado, a-
que el asunto vaya correspondiendo, de alguna manera, --
pues toda proporción guardada a como acontece legalmente
por las competencias de los amparos que venían analizando,
por razón de materia y que automáticamente correspondían
a la Primera, Segunda, Tercera o Cuarta Sala de esa mang-
ra, se entendió durante mucho tiempo la representación,--
pero viene la reforma de mil novecientos setenta y seis-
que dice lo siguiente: En la Exposición de Motivos entre
los cambios que se surtieron, está comprendido el de la-
transformación de la Secretaría de la Presidencia que --
tomaría el nombre de Secretaría de Programación y Presu-
puesto para atribuciones definidas en dichas materias --
me saltaré una parte, aunque es muy importante para que-
darme en otro párrafo más adelante, en tal virtud, y a -
efecto de que la atención de los negocios que en materia
de amparo aluda al encargado del Poder Ejecutivo, no lle-
garen a resentir retraso alguno, me permito promover por
el mismo conducto de ustedes, iniciativa de reformas al-
segundo párrafo del artículo 19 de la mencionada Ley de-
Amparo, con la finalidad de que la función que ahora --
desempeña en este campo la Secretaría de la Presidencia,
pase a ser de la incumbencia del Procurador General de -
la República, consejero jurídico del gobierno por deter-

- 4 -

minación del artículo 102 constitucional, qué es lo que-
quiso decir aquí la iniciativa de reformas a la Ley de -
Amparo, quiere decir esto, que pese a que se había en--
tendido a raíz de las reformas de mil novecientos setenta
y siete que la representación era automática por razón -
de la materia, pese a ello de hecho se estaba dando a la
Secretaría de la Presidencia, el control de todos los an-
paros y las representaciones correspondientes a los Se--
cretarios de Estado o Jefes de Departamento de Estado, -
posiblemente si lo cual no es de extrañar, porque hay --
muchos amparos en que interviene de manera irrelevante -
inclusive tratándose de leyes dos o más Secretarías de -
Estado o un Jefe de Departamento de Estado y otro Secre-
tario igualmente ha sido, se quiere pues entonces decir-
que se quitó a la Secretaría de la Presidencia ese con--
trol que de hecho estaba llevando y se le dio al Procu--
rador General de la República.

CONTINUA EN LA SEGUNDA PARTE.

del noveno turno.

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

- 1 -

... el artículo 102 Constitucional que se entiende que es perfectamente explicable, lógico y además jurídico pero lo curioso aquí es que legalizó, elevó a la categoría de ley lo que de hecho se venía haciendo, de hecho tenía que llevarse un control de la representación del Jefe del Ejecutivo y ese control creo yo, no puede darse jurídica y constitucionalmente más válidamente que a través del Procurador General de la República, que como aparece el artículo 19 en su segundo párrafo, que quedó desde entonces en esa forma, lo voy a leer, pese a que lo hemos leído varias veces, dice "no obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites de esta ley en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal, a través del Procurador General de la República", a mí se me disiparon las dudas que yo hubiere podido tener por las cuales voté en contra y por eso yo apoyo el proyecto como está presentado aunque no en todos sus términos, el motivo de mi disidencia en relación con el proyecto presentado por el señor Ministro Azuela está en la parte final en donde se dice que la sentencia recurrida, por lo que en todo caso procede que el Juez de Distrito ordene se notifique el referido fallo por conducto del Procurador General de la República como lo establece el último párrafo del 27, yo creo que aquí, pues aunque no se dice expresamente pero se le están dando efectos a un desechamiento de recurso, creo que yo me sumaría al proyecto si no se le diera esta salvedad que son efectos disfrazados de la ley en tratándose de amparos, yo sostengo que se puede dar, pero tratándose de un desechamiento no se desecha el recurso y ya se procederá en la forma en que vengan las autoridades respon-

- 2 -

sables pero no tenemos ni siquiera facultades para suplir deficiencia de queja en este asunto.

EL M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Castañón.

EL M. CASTAÑÓN LEON: Gracias señor Presidente. No voy a abundar en razones, nada más pretendía dar lectura al dictamen de la Cámara de Senadores aunque ya el señor Ministro Carpizo lo ha hecho, de manera que señalaré nada más que yo comparto los puntos de vista del señor Ministro Rocha y del Ministro-Carpizo.

EL M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Silva.

EL M. DE SILVA NAVA: Gracias señor Presidente. Nada más para comentar que la lectura que hizo el señor Ministro-Carpizo respecto de algún dictamen, si no me equivoco de la Cámara del Senado, pues es muy ilustrativo y muy útil, pero para entender la figura de la substitución; no creo que tenga una relación directa con el problema de la representación del Presidente de la República que es lo que se ve en este debate. Nadie ha dicho que el Jefe del Departamento no puede ser suplido o sustituido en sus ausencias, el problema es si él o quien lo supla tiene o no la representación del Presidente de la República.

Por otra parte, en principio estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Ministro Díaz Romero que se trata de efectos disfrazados.

- 3 -

Cuando yo incluí ese tema en el proyecto que se analizó con anterioridad, lo hice para tratar de resolver un problema de modo práctico, es decir, el desechamiento del recurso implicaba la declaración de firmeza de la sentencia y se me hizo un poco violento declarar firme la sentencia cuando el procedimiento no era adecuado, esto es un prolijo, pero si dejamos a la interpretación del juez, o a la interpretación, yo no tengo ningún inconveniente, claro no estoy hablando como ponente porque no es mi proyecto, digo, yo no tengo ningún inconveniente en que no se trate el asunto, es decir, yo no me opondría si el ponente está de acuerdo en quitar ese párrafo, y si el ponente estima que debe seguir el párrafo, yo también estoy de acuerdo.

EL M. PRESIDENTE: Quiero decirle que yo también le quitaría el párrafo de la foja siete donde dice que confirma la interpretación que el Presidente ha estado dando, no creo que el actuar de alguna de las autoridades venga a confirmar la interpretación de un proyecto, yo también me sumo a las ideas expuestas por el señor Ministro Rocha, pero pues eso lo hago nada más como colaboración en un momento dado.

Tiene la palabra el señor Ministro Azuela.

EL M. AZUELA GUITRON: Gracias señor Presidente. Una primera consideración en cuanto a una observación que hizo el señor Ministro Rocha que me parece que no se ha contestado y yo quisiera contestar, por qué la primera notificación se haría al Procurador General de la República, porque precisamente en los términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y esto está muy enaltecido con la intervención del señor Ministro Díaz Romero, -

- 4 -

una de las facultades, uno de los atributos de la Procuraduría General de la República, es servir precisamente como conducto - para que el Presidente de la República pueda otorgar su representación a quien estime pertinente de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal así es que esto me - parece a mí perfectamente congruente, por qué se va a notificar al Procurador, porque la Ley de Amparo señala ese camino, me - parece especialmente ilustrativa la aportación del señor Ministro Díaz Romero porque por lo pronto nos ha ilustrado en el sentido de que este artículo no es de 1986 como lo afirmó el señor Ministro Rocha.

CONTINUA DECIMO TURNO

...como lo afirmó el señor ministro Rocha sino que en realidad es de mil novecientos setenta y seis, y en 1976, en lo que leyó el señor ministro Díaz Romero se observa que se le está dando un sentido a la adición lo cual obedece además a las reglas de interpretación. Es cierto que no hay que caer en la literalidad, pero cuando algo se introduce en un precepto, lo lógico es que tiene un sentido y el sentido lo dio claramente el señor ministro Díaz Romero al leer que se hacía referencia a una situación de hecho para superarla a través de una situación de derecho que le da intervención al procurador general de la República. Después hay algunos planteamientos en cuanto a correcciones, en cuanto a supresiones, etcétera. Estoy de acuerdo en que conviene suprimir, en la página siete lo de: Conviene destacar que la propia autoridad recurrente interpreta...etcétera, donde hacemos referencia a situación del derecho porque de ser consistente, tendríamos que añadir, probablemente muchísimas páginas donde añadiera la vigencia del ministro Rocha, la vigencia del ministro Villagordoa y esto no precisamente sería provechoso para la interpretación jurídica, de tal modo que este párrafo lo eliminaría y me parece a mí atendible la observación del señor ministro Díaz Romero, estimo que se debe suprimir la salvedad en virtud de que en el caso, y probablemente coincida conmigo el señor ministro de Silva puesto que este, el que interpreto es el sentir de su exposición. Lo que debemos evitar es declarar firme la sentencia recurrida. Si esta llega a ser la ponencia que se apruebe, esto no impide que en un momento dado si quien puede impugnar una sentencia está en tiempo y eso ya se vería en su debido

momento, pero por lo pronto nosotros estamos en presencia técnicamente de un recurso hecho valer porque no tiene representación y por lo mismo yo variaría la parte considerativa suprimiendo, en la página ocho, a partir de: No es capa a la consideración de este órgano colegiado, ese párrafo se suprime y el punto resolutivo, quitaríamos lo que dice: sin perjuicio de lo indicado en el penúltimo párrafo del considerando segundo de esta resolución, y quedaría simplemente: se desecha el recurso de revisión interpuesto por el secretario general de gobierno del departamento del distrito federal, por ausencia del jefe, en representación del presidente de la República.

EL M. PRESIDENTE: Está suficientemente discutido.

Tiene la palabra la ministra Fausta Moreno.

LA M. MORENO FLORES: Muchas gracias señor presidente. Me siento obligada a hablar en esta ocasión porque voy a cambiar el sentido de mi veto. Realmente yo había votado antes en contra del criterio que ahora sustenta el proyecto, sin embargo me han convencido los argumentos que han expuesto, a lo largo de esta discusión, los señores ministros que han hecho uso de la palabra, especialmente la intervención de don Juan Díaz Romero. También quisiera yo aclarar que el ministro Rocha no se equivocó diciendo que no había, que este artículo no era anterior, sí era anterior, lo que sucede que en el año de 1986 tuvo una nueva reforma el artículo 19 de la ley de amparo y quizá a ella se haya referido, pero definitivamente me convenzo de que no tiene representación el presidente de la República en la forma que se expone en estos casos.

EL M. PRESIDENTE: Está suficientemente discutido?

Recoja la votación.

EL M. DE SILVA NAVA: Con el proyecto.

EL M. MAGAÑA CARDENAS: Con el proyecto.

EL M. DE ALBA LEYVA: Con el proyecto y las modificaciones aceptadas por el ponente.

EL M. ROCHA DIAZ: En contra.

EL M. AZUOLA GUITRÓN: Con el proyecto.

EL M. CASTAÑON LEON: En contra.

EL M. LOPEZ CONTRERAS: Con el proyecto.

EL M. FERNANDEZ DOBLADO: Con el proyecto y las modificaciones.

EL M. PAVON VASCONCELOS: En contra.

LA M. ADATO GREEN: Con el proyecto pero con las supresiones.

EL M. RODRIGUEZ ROLDAN: Con la consulta y las modificaciones aceptadas por el ponente.

EL M. MARTINEZ DELGADO: Con el proyecto modificado.

EL M. CARPISO MAC GREGOR: En contra.

EL M. CONZALEZ MARTINEZ: Con el proyecto.

EL M. VILLAGORDOA LOZANO: Con el proyecto.

LA M. MORENO FLORES: Con el proyecto modificado.

EL M. CHAPITAL: En contra. Congruente con ^{un voto} ~~cuatro~~ anterior.

EL M. DIAZ ROMERO: Con el proyecto modificado.

EL M. SCHMIL ORDÓÑEZ: Con el proyecto modificado.

EL M. PRESIDENTE: En contra.

LA C. SECRETARIA: Señor presidente, hay mayoría de catorce votos con el proyecto.

EL M. PRESIDENTE: En consecuencia, se declara: "UNICO. SE DESECHA EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, POR AUSENCIA DEL JEFE DE DICHO DEPARTAMENTO, EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. NOTIFIQUESE."

Tiene la palabra el señor ministro Rocha.

EL M. ROCHA DIAZ: Gracias señor presidente. Para informar al honorable pleno que me reserve el derecho a formular voto particular.

EL M. PRESIDENTE: Tome nota señora secretaria que cuando se termine el engrose se le pase al señor ministro Rocha Díaz para que formule voto particular.

Consulto a los señores ministros la conveniencia de levantar la sesión dado lo avanzado de la hora. Se levanta la sesión y se cita a los señores ministros para el día martes a las once horas.

SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14.55 HORAS